

por sí o por no.

También las Fuerzas Armadas aguardan una definición a su planteo de mejores sueldos; el gobierno prometió una solución definitiva, sobre la base de un incremento general del 40%. Esa cifra no conformó: las Fuerzas Armadas señalan que con ese 40%, habría suboficiales y oficiales de menor jerarquía que no llegarían a ganar el pregonado salario mínimo, vital y móvil.

Las dos iniciativas con las que los justicialistas esperan abrir el fuego en el Congreso son: una ley de amnistía que haga factible el retorno al país de los desterrados políticos y otra que respalde la aplicación de los 13 puntos del Plan de Lucha de la CGT: 1) actualización de salarios; 2) Ministerio de Trabajo al servicio de la justicia laboral; 3) derogación de leyes represivas; 4) autarquía de las Cajas de Previsión; 5) control de precios; 6) reactivación de la industria y actividades rurales con sentido de empresas nacionales; 7) derogación de proscripciones políticas; 8) adecuación del presupuesto a favor de los docentes; 9) creación de nuevas fuentes de trabajo; 10) leyes en favor de la mujer; 11) reincorporación de obreros despedidos; 12) liberación de presos políticos y sociales; 13) política internacional independiente.

Entre ambas iniciativas ambula otra que propone la aplicación del salario mínimo, vital y móvil para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y una cuarta en favor de la nacionalización de los depósitos bancarios y de creación de un ente de comercio exterior, similar al IAPI.

El peronismo, avanzaba en la unidad interna. Había un solo bloque de diputados, lo cual vaticinaba mayores dificultades para el gobierno.

Perón dice que no renuncia a volver a la Argentina, pero entiende que ese retorno no debería concretarse inmediatamente. Cree que tienen que llegar al poder por el camino de las urnas y que entonces su regreso sería automático y sugiere que es preciso apartarse de las soluciones de fuerza.

## MARINI PROPONE UNA SALIDA

Mientras el peronismo trata de ajustar la unidad en el ámbito parlamentario y partidario sin descartar el proceso electoral de renovación de gobernadores de 1 %7, en el sector oficialista también hay cabezas pensantes. Una de ellas es la del gobernador bonaerense Anselmo Marini. Comió con los coroneles Alcides López Aufranc y Edgar Collins -jefe del Regimiento 8 de Tanques, cargo que antes ocupaba el primero, ahora, subjefe de Operaciones del Estado Mayor- y reservó para la sobremesa una sorpresiva solución que permitirá el fracaso electoral del peronismo.

Los jefes militares escucharon y se miraron asombrados por lo que parecía una broma: Marini propugnaba añadir a la Capital Federal el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, que el 14 de marzo consolidó la fuerte victoria peronista en esa provincia. Pasarán los años y un nuevo gobierno radical, esta vez el del Dr. Raúl Alfonsín propondrá algo similar.

El Ministerio de Trabajo entregó su respuesta a la CGT: Sola interpretaba "el reclamo" como una solicitud, ponía condiciones (fijar los puntos a debatir, dar los nombres de quienes participarían en la entrevista) y afirmaba que una vez aceptadas, trataría los problemas que "afligen" a la CGT.

La CGT sufrió un nuevo encrespamiento cuando se concretaron los nuevos salarios mínimos, vitales y móviles: \$ 16.500 para la familia-tipo y \$ 11.500 para los solteros, que regirán desde el 1° de mayo. "Se ha consumado un nuevo despojo a la clase trabajadora", afirmaron los dirigentes de la CGT, para quienes el salario de la familia-tipo debe ser de 23.630 pesos, de acuerdo a cálculos de la canasta familiar. Impugnó también el procedimiento seguido por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que votó el proyecto del sector gubernamental, sin esperar el dictamen de la comisión encargada de informar sobre la variación estadística del costo de vida.

En realidad, el gobierno, apremiado por el incremento del costo de vida que ya produce la devaluación del peso, recurrió a una artimaña comiteril: señaló los nuevos toques y aseguró seis meses de calma. La CGT se mostró dispuesta a perturbar esa calma; apelará a todos los medios, comunicó, para promover una interpelación parlamentaria al ministro de Trabajo y lograr

reformas a la ley 16.459 del salario mínimo y vital.

Ante la inminencia de la apertura de las sesiones, la inquietud general se repetía en dos preguntas: ¿cuál será la actitud de los peronistas en la Cámara de Diputados? ¿cuál será la magnitud del cambio que el gobierno piensa introducir en la economía?

Las dos preguntas rozaban de cerca el Congreso, pues las dos situaciones lo tendrían como ámbito natural, tanto si el peronismo adopta una díscola postura, como si la economía sufre modificaciones de fondo.

Más aún, ciertas rebeldías nacidas en el bloque de secadores oficialistas hacían sospechar que lo último podría concretarse en breve. Sustancialmente los dos interrogantes afectaban al Congreso hasta donde, en el aspecto anecdótico y circunstancial, reproducían una inquisición mayor todavía quien los contiene o sintetiza ¿cómo se operará la recomposición del poder en la Argentina, luego de la variación de sus elementos fundamentales registrada el 14 de marzo? Ese domingo quedó definitivamente derrotada la proporcionalidad y el regreso al sistema de los grandes partidos.

¿Qué porción del poder se dispensarán entre ellos? ¿Qué papel cumplirán los sectores secundarios?

Finalmente, el peronismo anunció la constitución de una llamada Mesa Analítica, integrada por los Cinco Grandes (Vandor, Framini, Iturbe, Lascano, Parodi) tres representantes de las 62 Organizaciones (Gazzera, Diskin y Olmos) y dos de la CGT (José Alonso y Fernando Donaires). Esa Mesa se convierte en una superestructura: sus miembros determinarán la prioridad de los proyectos a presentar, y la bancada debe consultarlos en todos los casos.

## LOS DOS ROSTROS RADICALES

Mientras las tendencias del peronismo y su ubicación en el ajedrez legislativo tendían a esclarecerse, no ocurría lo mismo en el bloque de la UCRP, donde se entrecrocaban los puntos de vista más disímiles. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Vázquez, manifestó en Europa que el justicialismo "continúa siendo un factor disolvente en la vida nacional". Vázquez, vinculado a Carlos H. Perette, se transformó en blanco de una eventual interpelación peronista. Privadamente, los radicales del Pueblo no se detenían en planteamientos parciales; la lucha por la Cámara de Diputados, les emocionaba menos que la reincidente necesidad previa de saberse propietarios de una estrategia que los conduzca a la victoria a mediano y largo plazo. De hecho, dos grandes facciones se perfilan en la UCRP.

Todo el unionismo, gran parte del balbinismo y multitud de antiguos militantes antiperonistas suponen que la solución para su partido, en la Cámara y en la calle, consiste en enfrentar al peronismo.

No obstante, el desaliento los cubría; presumían que en condiciones similares a la del 14 de marzo, el peronismo tomaría a triunfar en 1967.

Los más extremistas de esta facción llegaron a admitir que individualmente preconizarían el golpe de Estado militar y la instalación de una dictadura de esa extracción en 1967, si la victoria justicialista fuere inminente en los principales distritos de la República. Reconocen que esa dictadura barrería con la UCRP, pero suponen que ese sacrificio es mejor que permitir el regreso del "prófugo". Los más moderados piensan que el gobierno puede deteriorar las bases electorales del justicialismo con abrumadoras compañías proselitistas. Todos coinciden en la necesidad de que la UCRP ate a su carro al conservatismo, al socialismo democrático, a la democracia progresista, a UDELPA, a la Confederación de Partidos Provinciales, y hasta al MID. La segunda corriente, la de los vanguardistas (cimentada por la joven guardia del sabattinismo, la juventud de la UCRP y los senadores cuyo mandato cesa a fines de este año) buscan la renovación

**Los más extremistas de esta facción llegaron a admitir que individualmente preconizarían el golpe de Estado militar y la instalación de una dictadura de esa extracción en 1967, si la victoria justicialista fuere inminente en los principales distritos de la República. Reconocen que esa dictadura barrería con la UCRP, pero suponen que ese sacrificio es mejor que permitir el regreso del "prófugo".**